BARRERAS QUE ENFRENTAN LAS MUJERES EN COLOMBIA PARA UN ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LOS PROCESOS PENALES

Barriers faced by women in Colombia for effective access to justice in criminal proceedings

Laura Sofía Daza Pamo¹
Valentina Laverde Fortoul²

Para citar este ensayo:

Daza Pamo, L. S. y Laverde Fortoul, V. (2024). Barreras que enfrentan las mujeres en Colombia para un acceso efectivo a la administración de justicia en los procesos penales. *Revista Arista Jurídico-Política*, 1(1), 135-141.

Resumen

A través de esta investigación, se pretende examinar las principales barreras que enfrentan las mujeres en Colombia para acceder de manera efectiva a la administración de justicia en los procesos penales. En este orden de ideas, si bien es cierto que este derecho se encuentra consagrado en disposiciones jurídicas tales como la Constitución Política o el Código General del Proceso, y que se desarrolla en un marco de igualdad, en la práctica las mujeres se enfrentan a obstáculos significativos, como los estereotipos de género, la falta de capacitación de los operadores judiciales, la burocratización del sistema judicial y la ineficacia de las medidas de protección establecidas por la ley. Estos factores no solo dificultan la capacidad de las víctimas para denunciar abusos, sino que también tienden a generar un escenario de revictimización que trae

¹ Estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia.

² Estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia.

como consecuencia la construcción de un sesgo hacia el proceso judicial, asociado con desconfianza e inoperancia. Bajo esta perspectiva, será posible concluir que la garantía del derecho a la administración de justicia vista desde una perspectiva de género, implica que las mujeres enfrentan obstáculos adicionales a los tradicionales debido a su género. Por lo anterior, se reconoce la necesidad de que las instituciones y autoridades involucradas en el proceso penal consoliden un esfuerzo por mejorar las condiciones de este, especialmente atendiendo a la reducción de trámites innecesarios y a la capacitación de los operadores en perspectiva de género.

Palabras clave: acceso a la justicia; barreras de acceso; denuncia; perspectiva de género; proceso penal; revictimización; sistema judicial.

Abstract

Through this research, the aim is to examine the main barriers women in Colombia face in effectively accessing the administration of justice in criminal proceedings. In this regard, although it is true that this right is enshrined in legal provisions such as the Political Constitution or the General Code of Procedure, and that it is developed within a framework of equality, in practice, women face significant obstacles such as gender stereotypes, the lack of training for judicial operators, the bureaucratization of the judicial system, and the ineffectiveness of the protective measures established by law. These factors not only hinder the victims' ability to report abuses, but they also tend to create a scenario of revictimization that results in the development of a bias towards the judicial process associated with distrust and ineffectiveness. From this perspective, it is possible to conclude that the guarantee of the right to the administration of justice, viewed from a gender perspective, implies that women face additional obstacles beyond the traditional ones, due to their gender. For the above reasons, there is a recognition of the need for the institutions and authorities involved in the criminal process to consolidate an effort to improve its conditions, particularly by addressing the reduction of unnecessary procedures and training operators with a gender perspective.

Keywords: access to justice; barriers to access; criminal process; gender perspective; judicial system; reporting; revictimization.

INTRODUCCIÓN

En Colombia, el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia está garantizado por el artículo 229 de la Constitución Política y el artículo 2 del Código

General del Proceso. No obstante, en la práctica, la materialización de este derecho enfrenta numerosas barreras económicas, geográficas, informativas, culturales, institucionales, lingüísticas y tecnológicas.

Ahora bien, si se añade un enfoque de género a esta problemática, se evidenciará que las mujeres enfrentan obstáculos adicionales a los tradicionales debido a los factores asociados con su género. Por ejemplo, la Encuesta de Necesidades Jurídicas en Colombia muestra que la intersección de ser mujer con situaciones de extrema pobreza incrementa significativamente la vulnerabilidad en términos de necesidades jurídicas y acceso a la justicia (Observatorio sobre Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia, s. f.). Esto se enmarca en un contexto histórico en el que las mujeres han sido sistemáticamente calificadas como un grupo minoritario y discriminado en el marco de una sociedad profundamente patriarcal.

En función de lo anterior, este trabajo tiene por objeto analizar las principales barreras que enfrentan las mujeres en Colombia para gozar de un acceso real e integral a la justicia en los procesos penales, ofreciendo como resultado un breve acercamiento a las posibles estrategias para superar esta problemática. Se realiza el análisis en el contexto del derecho penal, debido a que, si bien estos desafíos no se limitan únicamente a esta esfera, es posible señalar que este es el escenario en el que ocurren con mayor frecuencia, lo cual puede deducirse de los trabajos de autores como Nítola (2021) y Botero y colaboradores (2009).

En ese orden de ideas, para dar cumplimiento a este propósito, el estudio empleará una metodología cualitativa con un método de hermenéutica jurídica. Es relevante mencionar que esta investigación se desarrolla en el marco de la materia Teoría General del Proceso de la Universidad Nacional de Colombia, cuyo profesor encargado es Óscar Mateo Ramírez Vargas.

En esta línea, las principales barreras identificadas fueron la reproducción de estereotipos de género, la falta de capacitación de los operadores, la burocratización y, por último, la insuficiencia de medidas de protección eficaces. A continuación, se abordarán esta serie de desafíos.

REPRODUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

El derecho, como reflejo del sistema patriarcal, perpetúa lógicas machistas que afectan todas las etapas del proceso legal, desde su producción hasta su interpretación. Los estereotipos de género, arraigados en concepciones culturales tradicionales, influyen negativamente en la aplicación de la justicia, llevando a decisiones desfavorables para las mujeres.

Investigaciones como la de la Corporación SISMA Mujer (2011) evidencian que funcionarios de la Fiscalía utilizan estos estereotipos para archivar casos, desconfiar del testimonio de las víctimas y considerar la violencia de género como un delito menor. Además, diversos operadores judiciales, junto con autoridades como la policía, a menudo responsabilizan a las víctimas por los incidentes que las llevan a denunciar y, en caso de querer desistir del proceso, son señaladas por los mismos como culpables de los delitos cometidos en su contra (2017, como se cita en Botero *et al.*, 2009).

Lo anterior ocurre en el primer acercamiento de la mujer con la administración de justicia, lo que no solo perpetúa un escenario de desigualdad, sino que también desincentiva la denuncia de los abusos de los que son víctimas. La percepción de que encontrarán, en su primera aproximación al proceso, un sinnúmero de excusas para que no sean partícipes genera en ellas una pérdida de confianza en la institución.

FALTA DE CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES

En este contexto, el proceso penal comienza con la denuncia de la víctima, lo que de por sí ya genera un peso psicológico y moral significativo en la denunciante, toda vez que, como lo afirman Rubio y Monteros (2001), la víctima construye pensamientos auto-inculpatorios, referidos a su inadecuada actuación antes y durante la agresión. En esta etapa, incluso algunas mujeres deciden guardar silencio y no acudir a la administración de justicia.

No obstante, quienes deciden denunciar se encuentran con funcionarios del Estado de quienes se espera la mayor empatía y sensibilidad profesional. Sin embargo, a menudo reciben mensajes inculpatorios o comentarios inapropiados. En algunos casos, las mujeres se ven obligadas a reiterar los sucesos anteriores, concomitantes y posteriores a la violación de sus derechos tantas veces como se considere necesario. Lo anterior es consecuencia de la falta de capacitación con enfoque de género de los operadores, lo que, según autoras como Castro (2022) y Piqué (2017), contribuye a la revictimización³, lo que dificulta el acceso efectivo a la justicia y exacerba el trauma de las víctimas.

³ Tanto a nivel jurisprudencial como doctrinal se ha hecho referencia a la victimización secundaria, que, de conformidad con Lovatón (2009), se aplica cuando el daño sufrido por la víctima es incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia. Así, se hablará en un primer momento de la victimización primaria, que atiende a los daños generados a la víctima en consecuencia de la agresión o afectación a sus derechos, y de la victimización secundaria, en consideración a la inadecuada atención que esta recibe por parte de las instituciones estatales que la acogen (Campbell, 2005, como se cita en Botero *et al.*, 2009); ambos casos señalados doctrinalmente como un escenario de revictimización.

BUROCRATIZACIÓN

Las barreras institucionales están directamente vinculadas a la burocratización del sistema judicial, lo que se manifiesta en un formalismo excesivo, falta de información oportuna, uso desproporcionado de términos jurídicos, falta de coordinación interinstitucional y mala gestión de los despachos judiciales. Aunque se trata de un concepto que abarca una variedad de circunstancias, se ha determinado que la burocratización genera una excesiva prolongación o dilación de los trámites procesales, lo que evita que las denunciadas reciban una pronta y oportuna reparación e indemnización.

Esto conlleva a una pérdida de credibilidad en la administración de justicia, donde las mujeres sienten que están perdiendo el tiempo, malgastando su dinero y, sobre todo, que se encuentran frente a un escenario de incomprensión en el que la tramitología prevalece sobre la protección de sus derechos (Unidad Técnica Ejecutiva [UTE] *et al.*, 2013, como se cita en Barco *et al.*, 2022). De esta manera, la burocratización se consolida como una de las principales razones por las que las mujeres no comparecen ante las instancias judiciales.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INEFICACES

En el ámbito de las violencias de género, a pesar de la existencia de normativas que regulan las medidas de protección para las mujeres víctimas, como en los casos de violencia intrafamiliar, se ha evidenciado que su implementación presenta notables deficiencias. Al respecto, se afirma que los funcionarios públicos frecuentemente no aplican ni siguen los lineamientos establecidos para las medidas de protección, y se observa una falta de coordinación entre las instituciones encargadas de restablecer los derechos de las víctimas (Gómez, 2020).

Como resultado, aunque los mecanismos están formalmente regulados, carecen de accesibilidad y no ofrecen el acompañamiento adecuado a las mujeres afectadas. Esta situación deja a las víctimas en un estado de desamparo, con una legislación sólida, pero sin herramientas efectivas que aseguren su protección. La incertidumbre en la obtención de asistencia estatal contribuye a que muchas mujeres opten por no denunciar las violencias sufridas, perpetuando así el ciclo de silencio y revictimización.

CONCLUSIÓN

Considerando las barreras existentes para el acceso efectivo a la administración de justicia en Colombia, es fundamental destacar que a estas se añaden dificultades específicas para las mujeres, tales como los estereotipos de género, la falta de capacitación de los operadores judiciales, la burocratización del sistema y la ineficacia de las medidas de protección. Estas circunstancias culminan en escenarios de revictimización que conducen a: 1) optar por el silencio y no participar en el proceso judicial; y 2) enfrentar situaciones que dificultan su avance en el mismo.

Este fenómeno refleja un problema estructural que no solo deriva del ámbito jurídico, sino que también se encuentra arraigado en la sociedad, perpetuando la noción errónea de que las mujeres deben adherirse a roles determinados por estereotipos de género que fomentan la violencia y la discriminación. Sin embargo, es crucial reconocer que las instituciones cuentan con herramientas que tienen la capacidad de mitigar esta problemática. Esto incluye la capacitación del funcionariado judicial en perspectiva de género y en la atención sensible a las víctimas, la reducción de trámites innecesarios, la evitación de la reproducción de lógicas machistas en las decisiones judiciales, y la aseguración de la implementación oportuna de medidas de protección.

Finalmente, es importante destacar que este es solo un primer acercamiento a las posibles soluciones para la superación de estas barreras, recalcando que esta problemática debe ser profundizada en un análisis posterior.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barco, S., Lozano, E. y Villareal, N. (2022). *Prácticas de Revictimización durante el Proceso de Judicialización de los Delitos de Violencia Sexual en el Distrito Judicial de Pasto* (tesis de maestría, Universidad Cooperativa de Colombia). Repositorio institucional. <https://tinyurl.com/3kwzwcwc>
- Botero, C., Coronel, E y Pérez, C. (2009). Revisión teórica del concepto de victimización secundaria. *Revista de Psicología*, 15(1), 49-58. <https://tinyurl.com/yc48shhj>
- Castro, A. (2022). *Responsabilidad del estado por error judicial por la inaplicación del enfoque diferencial de género: daño por la revictimización por parte de la administración de justicia como modalidad de violencia institucional* (tesis de maestría, Universidad Externado de Colombia). <https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.412>
- Corporación SISMA Mujer. (2011). *Obstáculos para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia*. <https://tinyurl.com/pxmj368p>

- Gómez, A. (2020). Efectividad de las medidas de protección a mujeres víctimas de violencia basada en género en Medellín. *Ratio Juris (UNAULA)*, 15(31), artículo 31. <https://doi.org/10.24142/raju.v15n31a13>
- Lovatón, D. (2009). Atención integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Algunos apuntes desde la victimología. *Revista IIDH*, 50. <https://tinyurl.com/3v5m55d4>
- Nítola, D. (2021). *Violencia de género y victimización secundaria: "Una falla funcional Institucional"*. Repositorio Universidad Libre. <https://hdl.handle.net/10901/20565>
- Observatorio sobre Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia. (s. f.). *Barreras de acceso a la justicia en Colombia*. Consultado el 6 de diciembre de 2024. <https://tinyurl.com/y79vm3c9>
- Piqué, M. (2017). *Género y justicia penal. Revictimización, acceso a la justicia y violencia institucional*. Editorial Didot.
- Rubio, M. y Monteros, S. (2001). Las víctimas de agresiones sexuales ante el sistema jurídico legal. *Anuario de Psicología Jurídica*, 11(1), 59-77. <https://tinyurl.com/2yjp4t6v>